Globethics Repository



Elecciones en Costa Rica [Elections in Costa Rica]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Vega Carballo, José Luis
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-05 06:53:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/222357

NUEVA SOCIEDAD NRO.34, ENERO-FEBRERO 1978, PP. 74-81

Elecciones en Costa Rica: ¿Opción por un nuevo modelo de desarrollo?

Vega-Carballo, José Luis

José Luis Vega Carballo: Sociólogo.

I. EL DESARROLLISMO Y EL ESTADO-BENEFACTOR (1948-70)

Después de la Guerra Civil de 1948 que tuvo como resultado el triunfo de la social-democracia costarricense, el país se recuperó lentamente como resultado de la estabilización de la vida política y del buen clima económico creado por la reconstrucción europea y luego por la guerra de Corea y los precios elevados del café en los mercados internacionales.

Cesaron pronto las conspiraciones oligárquicas y la producción nacional para el consumo interno pasó por una época de bonanza relativa, cuando funcionarios públicos y del llamado Punto Cuarto (antecesor de la A.I.D.), impulsaron algunas reformas de orden técnico y organizativo en el agro. Para este período no se produjeron aumentos de la inversión extranjera ni de la deuda interna que valga la pena mencionar y la administración del Presidente Ulate - que sucedió al corto período de ejercicio de la Junta de Gobierno (1948-1949) - no encontró estorbos para desarrollar sus actividades. Mientras tanto, el grupo de jóvenes políticos, empresarios e intelectuales socialdemócratas que ya tenía a José Figueres como caudillo indiscutible, preparaba su retorno al poder, esta vez por la vía electoral.

Ideología de Liberación Nacional

La plataforma del Partido Liberación Nacional, que sería el mecanismo para transitar por dicha vía, buscaba crear conciencia sobre los peligros de un retorno del caldero-comunismo de los años 40, tendencia electoral que no desapareció fácilmente. Ofrecía dicho partido, por otro lado, un amplio plan de "modernización" para el país, ejecutable a corto plazo, basado en la expansión de los servicios públicos y en el esquema de un "Estado benefactor". El objetivo básico del liberacionismo era dinamizar y diversificar la producción agropecuaria e impulsar la industria, todo con apoyo del Estado y de sus aparatos de desarrollo energético, educacional, sanitario y de seguridad social. La inversión pública se usaría a fondo para la construcción de viviendas y de obras de infraestructura, con lo que se suplirían las deficiencias de empuje de la burguesía tradicional y se

estimularía la expansión de las clases medias, que fueron ciertamente las más receptivas al mensaje liberacionista. Sin embargo, el programa especificaba que a través de varias políticas de revaloración salarial y de ayuda estatal directa debía aumentarse también el nivel de vida obrero-campesino, si se deseaba mantener la estabilidad socio-política, lograda después de los cambios de 1948.

Se anunciaron, con igual énfasis, la necesidad de librar una lucha para colocar, a mejores precios, las exportaciones agropecuarias, una política de aceptación del capital foráneo para llenar las deficiencias del ahorro nacional, y la búsqueda de un mejor entendimiento con los Estados Unidos y la United Fruit Company. Con esta estrategia se pensaba ofrecer una alternativa al socialismo utópico y al comunismo, realizable dentro del marco de la democracia representativa, el cual se debería perfeccionar y ampliar cultivando el pluralismo ideológico, la competencia electoral y parlamentaria de los partidos, la libertad de prensa, y fortaleciendo el régimen de los derechos humanos.

La política económico-social de Figueres obedeció esencialmente a los principios de una estrategia desarrollista que pretendía lograr la armonización de intereses clasistas, fortalecer la expansión general de los sectores medios y estimular la formación de un fuerte, abierto y renovado núcleo empresarial, tanto dentro como fuera de las empresas públicas respetando en ciertas áreas a los mecanismos del mercado.

La tarea primordial de la nueva dirigencia era reajustar el "modelo agro-exportador tradicional", convirtiendo a la inversión foránea y al sector público en motores del desarrollo económico que debía tener como meta alcanzar, sin violencia política y en un clima de legalidad, un modelo más avanzado de tipo agrícola e industrial regido por la mancomunidad de intereses que giraban alrededor del Partido Liberación Nacional.

Bases del modelo de desarrollo

Cuando en 1953 el grupo figuerista llegó al poder con gran respaldo electoral, continuó decididamente la política antes emprendida de modernizar, ampliar y descentralizar el Estado, lanzando desde allí los estímulos a la inversión en infraestructura, energía, seguridad social, vivienda, salud, educación, industria liviana, etc. El aumento de la acción económico-social del Estado, permitió la expansión y mayor gravitación política de sectores de la clase media urbana, que se constituyeron, junto con el resto de los propietarios rurales, en una importante clientela electoral liberacionista, cada vez más burocratizada y ávida de consumo.

Fue surgiendo, al calor de las empresas públicas, un poderoso conjunto de jerarcas estatales - una especie de "burguesía de Estado" - que se entendía fácilmente en la tarea común de ampliar sus poderes, y que, como veremos, ha conformado un esquema propio de desarrollo e inversión paralelo al de la empresa privada nacional y extranjera, en cuyo campo muchos de ellos también se desenvuelven exitosamente.

Lo que ha ido quedando definido desde ese entonces como proyecto histórico de cambio - que ha respetado y perfeccionado al esquema clásico de la democracia liberal y que no ha podido ser modificado por la oposición anti-liberacionista - es el lanzamiento de la industrialización y en general del desarrollo económico sobre la base amplia de un sector de economía nacionalizada o estatizada. Ya en la década del 60 quedó demostrado que dicho sector junto con el Mercado Común Centroamericano - al cual Costa Rica ingresó en 1962 - estaban en capacidad de generar empleo, nuevas rentas y un mercado amplio para los bienes de consumo producidos por el sector privado, otorgando con todo esto a la dirigencia política liberacionista un grado mayor de control sobre las decisiones económicas.

En un principio se creyó que este sector nacionalizado tendría un papel subsidiario con respecto a la trayectoria de un nuevo núcleo de empresarios privados nacionales. Pero, como veremos, el proyecto ha llegado a tener consecuencias paradójicas que no intuyeron sus progenitores. Para estos no se trataba de dirigir la nueva economía estatal contra el sector privado, ni tampoco que de las estructuras de esa economía surgieran grupos o constelaciones de poder que manejaran las empresas públicas para su propio beneficio, pudiendo dejar a un lado en muchos casos el llamado "interés social" de las mismas. Tampoco se preveía la ofensiva capitalista externa que apoyándose en los mecanismos del Mercado Común Centroamericano terminaría desnacionalizando en sumo grado el sector industrial-comercial. El hecho fue que la alternativa se impulsó bajo el supuesto de que el sector privado no podía asumir la responsabilidad ni las tareas del tipo de desarrollo que desde los años cuarenta añoraba la nueva dirigencia social-demócrata, fuere por la debilidad de ese sector, por los altos riesgos de inversión que percibía, o bien por su dependencia de mercados y fuentes externas de financiamiento. La formación del sector nacionalizado permitió en la práctica un desarrollo más rápido y también relativamente más autónomo.

Por otra parte, siendo la inversión de tipo estatal, los beneficios revirtieron en muchos casos hacia los estratos menos acomodados del campo y la ciudad, los que habían padecido los rigores de la acumulación de capitales bajo el modelo agro-

exportador, y cuyos niveles de vida fueron mejorados en aras de la estabilidad social y política, bajo el esquema de un **Capitalismo de Estado-Benefactor** quizás único en el contexto latinoamericano.

Características del modelo de desarrollo

En efecto, si tomamos el período de 1950-70, observamos que el sector público continuó teniendo una expansión sin precedentes, que no pudo ser superada por el sector privado en su contribución al producto interno bruto. Según datos suministrados por el Banco Central, en 1950 el gasto público ascendía a un 33% del producto interno bruto; en 1960 la cifra fue de 55,6% y en 1970 alcanzó a 67,4%. Los empleados públicos que eran alrededor de 35.000 en 1960 pasaron de los 100.000 en 1975, lo que fue en gran medida determinante de que la población activa en el sector terciario pasara de constituir un 32,2% en 1963 a un 41,4% en 1973, según datos de los Censos de Población de esos años.

A pesar de las voluminosas exenciones de impuestos otorgadas a las industrias nuevas, ligadas al Mercomún Centroamericano, la captación de recursos por el sector público continuó creciendo estimulada por las recaudaciones provenientes del aumento de las importaciones que realizaron dichas industrias y de las exportaciones agropecuarias cuya expansión ha sido notable. Se aumentaron también los impuestos en varias ocasiones y el Estado a su vez ha contado, sin dificultad, con recursos externos para financiar muchas de sus actividades. Es decir, que el modelo solvente de expansión de la economía estatal y de los sectores sociales atados a ella, no sufrió retroceso alguno mientras se diversificaba la economía general del país, se desarrollaba el sector industrial a través del Mercomún en estrecho asocio con el capital foráneo y se estimulaba al agropecuario para que superara las crisis sufridas entre 1956 y 1962. El fortalecimiento y diferenciación de la clase privada burguesa que ha dado origen a sus "fracciones" nuevas de ganaderos, azucareros, industriales, banqueros, gerentes profesionales y técnicos enriquecidos, no implicó, pues, la paralización del desarrollo de la vasta tecno-burocracia estatal y de los sectores medios que han logrado manipular administrativamente en su provecho los cambios en la distribución del ingreso nacional. Es la concatenación de estas tendencias la que ha hecho posible la aparición de un modelo "affluent" de desarrollo económico con relativa tranquilidad política y social, el cual no por ello está exento de peligros, como se explicará en un momento.

II. LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES

Consolidación del modelo

Al tiempo que evolucionaban favorablemente los sectores industrial y agro-pecuario, siempre bajo una fuerte dependencia externa, la política desarrollista impulsada por el Partido Liberación Nacional, fue continuada durante la Administración Orlich (1962-1966). Aunque debido a la poca agilidad de la misma y a errores de táctica electoral subió al poder nuevamente una inestable amalgama de intereses opositores en 1966, es poco lo que realmente pudo esta hacer para variar el curso de las políticas liberacionistas, las que concurrían a sostener tendencias estructurales y presiones socio-políticas bien definidas e institucionalizadas. El esquema del nuevo **Capitalismo de Estado-Benefactor** respondía ya a claros intereses y estructuras clasistas.

Sobre todo era difícil variar substancialmente esas tendencias, si tomamos en cuenta que las mismas se arraigaban también en la constelación de "intereses creados" promovidos por la gran expansión de los sectores empresariales que actuaban dentro del Mercomún Centroamericano así como de la clase media que logró capturar agresivamente, durante todo el período, importantes porciones del ingreso nacional. Pero no sólo eso, sino que dicha clase hizo retroceder a otros sectores y utilizó la inversión foránea, y principalmente la burocracia y el gasto público, como palancas fundamentales de ascenso. Las cifras resumidas de un cuidadoso estudio efectuado por el economista Víctor Hugo Céspedes en 1962, demuestran que, si observamos la evolución del ingreso familiar por grupos de familias costarricenses entre 1961 y 1971, el 20% de las mismas con ingresos más bajos disminuyó su participación en el ingreso nacional de 6% a 5,4% mientras que el 70% de familias intermedias la aumentó significativamente pasando de un 48% a un 60,2%; y el 10% de las familias con ingresos más altos, que en 1961 absorbían el 46% del ingreso nacional, en 1971 sólo pudieron obtener un 34,4% del mismo.

Al observar los indicadores del período quedan entonces pocas dudas de que tiene bastante asidero la tesis de Luis Alberto Monge, dirigente y actual candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, en el sentido de que dicho Partido "a través de sus políticas económicas y culturales, ha promovido el fortalecimiento y surgimiento de los sectores medios de la población, a nivel profesional, empresarial, e intelectual". Pero, como él seguidamente lo señala, "el peligro está en que el poder económico de esos sectores no se equilibre con el de otros sectores urbanos y principalmente rurales, menos favorecidos".

La clave para explicar la importancia creciente que han adquirido esos sectores medios radica de seguro en el crecimiento de la actividad estatal y en la modificación que han sufrido los "principios organizativos" del capitalismo liberal por manos de la nueva tecno-burocracia constituida en gran poder político.

En síntesis, que hemos asistido en Costa Rica durante los últimos 25 años a un crecimiento extraordinario del aparato estatal y de la tecno-burocracia, debido a la implantación de un modelo desarrollista que se puede denominar **Capitalismo de Estado-Benefactor** . Tal modelo fue posible a raíz del reajuste político y de fuerzas sociales provocado por la crisis de los años 40. Al perder su hegemonía la antigua oligarquía agrocomercial, no hubo condiciones como para que un grupo de índole capitalista-industrial pudiera sustituirla y establecer una "hegemonía" de clase burguesa sobre moldes distintos y responder así a una modernización que era imprescindible. Pero sí es fácil notar la circunstancia de que la crisis hegemónica fue bien aprovechada por los emergentes estratos de la clase media para plantear sus reivindicaciones, forjar sus organizaciones y grupos de interés. Pero sobre todo para respaldar el intervencionismo estatal con que la nueva dirigencia política aspiraba a resolver los problemas del desarrollo y del cual se aprovechan esos sectores para acosar a la clase burguesa debilitada; pero todo sucedió sin que ello fuera a desembocar en un compromiso con las clases obrero-campesinas que agudizara la lucha de clases a escala nacional. No convenía a los sectores medios emergentes, y mucho menos en su conjunto a la clase burguesa, que las clases obrero-campesinas adquirieran capacidad autónoma de organización e intentaran resolver sus problemas fuera del parlamentarismo o del esquema paternalista de un Estado-Benefactor.

De allí la proliferación bastante desarticulada de programas sociales de asistencia que han perseguido beneficiar a los económicamente más débiles, los que bien pueden constituir un 70% de la población, un 50% de los cuales podrían considerarse todavía como "muy pobres" o "miserables". No hay duda de que el edificio del **Capitalismo de Estado-Benefactor** se derrumbaría si los programas se detienen. El problema está en determinar qué lo sustituiría y sobre todo qué suerte correría ante una embestida empresarial de corte reaccionario que contara con respaldo electoral.

Logro de objetivos y agotamiento

Sin embargo, ha sucedido un fenómeno interesante e inesperado. A pesar de que esos programas sociales tenían como objetivo central y manifiesto favorecer a la población de menores ingresos, se ha podido observar que con el tiempo muchos

se transformaron en palancas para el ascenso y mejoramiento de los sectores medios anclados en su mayor parte a la misma estructura del Estado-Capitalista-Benefactor. De ahí que un agudo observador como Alberto F. Cañas haya acuñado el término de "tapón de la clase media" para referirse a ese mecanismo por medio del cual dicha clase se ha apropiado en definitiva de gran parte de los recursos que se destinan a aliviar la pobreza e inseguridad de la clase trabajadora productiva de la ciudad y del campo y de otros grupos denominados "marginales". Al respecto ha dicho Cañas que:

"El sector de la clase media que trabaja para el Estado (empleados bancarios, de otras autónomas, maestros) ha sido el único grupo costarricense que se ha organizado en sindicatos. En sindicatos poderosos. Eso le ha convertido en el 'lobby' o grupo de presión más influyente del país... El problema que debe preocuparnos en forma global, es el de si la clase media, que ha sido la que en forma más copiosa se ha aprovechado de las leyes sociales, no se estará convirtiendo en el tapón que impide que los beneficios contemplados en esas leyes se filtren a las clases inferiores".

Sin embargo, Cañas no deja claramente expuesto el origen ni las consecuencias de ese comportamiento de la clase media, o de lo que otros llaman "sectores medios" que en su mayor parte se ubican dentro del aparato estatal del cual parecieran haberse adueñado paulatinamente. Hemos visto ya cómo esos sectores se proyectaron a la palestra política en los años 40 y cómo respaldaron e impulsaron un esquema desarrollista y de dependencia externa que expandiera la inversión pública y la ampliación de los cuadros burocráticos. Apoyaron igualmente con entusiasmo el Mercado Común Centroamericano. Ahora sabemos que son importantes - o principales - beneficiarios del nuevo orden de cosas generado por el despliegue del Estado-Benefactor. Pero eso no es todo. Estamos presenciando ahora el ejercicio cada vez más autónomo del poder de la alta tecno-burocracia que maneja el sector público que se torna cada vez más pesado, complejo y también ineficiente. A pesar de las fallas del Estado, aquella lo utiliza para proyectar su propio poder, si es necesario, contra los intereses de otras clases que se mueven principalmente fuera del ámbito estatal. No queremos sentar la tesis de que esa tecno-burocracia es en sí la cúspide o brazo de una nueva clase social; pero muchas veces se comporta como tal, sobre todo ante la debilidad de las clases, tanto burguesa como obrera y campesina, para forjar sus propias organizaciones o partidos políticos e imprimirle a la sociedad y al Estado mismo una fisonomía clasista más definida. Bajo tales circunstancias la alta tecno-burocracia, bajo la cual se acuartelan los sectores medios, podría ya constituir lo que Nicos Poulantzas

llama en su libro **Clases Sociales y Poder en el Estado Capitalista** , una "burguesía de Estado" que se erige como árbitro "bonapartista" de los conflictos sociales y tiende a volverse el eje del régimen económico-social prevaleciente, o sea del **Capitalismo de Estado-Benefactor**. Si el sector de economía nacionalizada que maneja y amplía, restringe cada vez más el campo de acción del capitalismo privado y, por otra parte, no da margen para que surjan asociaciones y organizaciones productivas y políticas propias de las clases obrero-campesinas, podría eventualmente llegarse al caso, en Costa Rica, de la consolidación de una extensa burocracia político-económica central que efectivamente se consolidaría como una nueva clase gobernante al fungir como "dueña" efectiva (aunque quizás no jurídica) de los medios fundamentales de producción y distribución. Como dice Poulantzas, "la burocracia puede, por medio del Estado, constituirse un lugar propio en las relaciones existentes de producción o hasta en las relaciones aún - no - dadas de producción. Sin embargo, no constituye entonces una clase en cuanto a burocracia, sino en cuanto clase efectiva".

También conviene considerar lo señalado por Karol Modzelewski y Jacek Kuron en su libro **Revolución Política o Poder Burocrático,** cuando dicen que:

"El sector estatal de la economía nacional en los países capitalistas no tiene nada en común con la propiedad social... La propiedad estatal de los medios de producción no es sino una de las formas de propiedad. Pertenece a los grupos sociales a los que pertenece el Estado".

Peligros y posibilidades

Pero es muy posible que antes de que cristalice plenamente una tendencia así, favorable a la constitución de los estratos tecno-burocráticos como "clase", seguida de una "despolitización estructural", se llegue a producir una fuerte reacción empresarial o burguesa con apoyo externo que persiga desnacionalizar el sector de las empresas públicas, revirtiendo la sociedad a un modelo burdo de capitalismo que separe los dominios de lo económico y lo político, en beneficio de los centros privados de decisión. Pero también podría ser posible otra evolución si, para atajar una tal reacción, los sectores tecno-burocráticos no tienen más alternativa que aliarse con las clases obrero-campesinas en la defensa de la función progresista que puede competer al desarrollo de un sector nacionalizado en un país en vías de desarrollo, sector que en este caso actuaría como el puntal de una economía y sociedad socialistas. De haber un camino hacia una sociedad socialista en Costa Rica, su vía más factible en las actuales circunstancias, se daría a través de una alianza estrecha entre esos sectores social-demócratas de la tecno-burocracia estatal

y los sectores populares obrero-campesinos, los que para participar en el proceso deberían ampliar sus bases de organización y elevar en mucho su nivel cultural, técnico y científico. Hablamos sólo de una cierta posibilidad. Pero en caso de darse esa alianza, como posible tendencia favorable al socialismo, no podría ser la tecnocracia aburguesada la que dicte la norma sino la democracia en su sentido más amplio: político, económico y social. En términos de progreso a largo plazo, nos atrevemos a afirmar que sería un grave retroceso desnacionalizar totalmente el sector de las empresas públicas y suprimir todos o los principales sistemas de seguridad y desarrollo social, para instaurar un régimen despiadado de empresa privada bajo el mito de que así se agilizaría el desarrollo global del país y se democratizarían sus instituciones. En un país que apenas sale del subdesarrollo no puede permitirse que el sector público quede reducido a funciones de vigilante, o meramente políticas, y que actúa como un apéndice de la iniciativa privada (que ha demostrado ser incapaz de solucionar los problemas de atraso en los países periféricos), para ayudarla a cubrir con impuestos que pagan todos los contribuyentes, los costos fijos de las empresas, creando economías externas y mayores fuentes de beneficio para las oligarquías financieras nacionales y extranjeras. Intentar en la Costa Rica de hoy una ruta así, sería instaurar un modelo obsoleto y autoritario de involución que requiere desmantelar la misma superestructura democrática e institucional del país, con la que se han logrado "limar" las asperezas más deshumanizantes del capitalismo clásico.

III. EL CAMINO DE LA DEMOCRATIZACION AMPLIADA Y UN PELIGRO REAL

Riesgos latentes

Si verdaderamente se desea llegar a una democratización económico-social que fortalezca la política, deben las empresas públicas revisarse en su totalidad, modificarse, ser agilizadas, y una por una, ponerse en condiciones de servir a toda la nación, impulsando su economía y evitando la dictadura económica de los poderes privados. No podría permitirse tampoco que la tecno-burocracia actual utilice arbitrariamente esas empresas, en su gran mayoría ineficientes y muchas al borde de la quiebra, para satisfacer sus intereses, en disposición de convertirse ya en intereses de clase. Ello podría conducir eventualmente a un puro **capitalismo de Estado,** piloteado por una élite tecno-burocrática de corte autoritario y hasta militar, que impondría sus decisiones arbitrariamente, sin frenos posibles que emanaran del nivel electoral y de las preferencias de los consumidores. Es casi seguro que, tanto la reacción empresarial incontenida como este otro posible desarrollo autoritario que acabamos de mencionar, si se dan en forma pura, liquidarían el ejemplo de Costa Rica como nación que mal que bien ha desarrollado

aceleradamente su economía, sin por ello poner en entredicho el parlamentarismo, las libertades ciudadanas y el respeto a las ideas. Pues estas alternativas señaladas se enmarcarían, **tarde o temprano,** dentro de un esquema militar-derechista y de entrega a los dictados de las corporaciones transnacionales por el que ya transitan la mayoría de los países latinoamericanos.

Un nuevo modelo de desarrollo

Por otra parte, la posibilidad de una apertura netamente costarricense hacia una vía socialista-democrática, bajo una alianza politizada y mayoritaria de los sectores tecno-burocráticos con los populares, difícilmente podría avanzar si liquida los campos de mejor competencia demostrada de la empresa privada y si no corrige drásticamente la ineficiencia, la descoordinación, el despilfarro y las desviaciones de las empresas públicas (en su conjunto, del Estado como poder organizador y rector) para ir garantizando un sistema de inversión y reparto de bienes y servicios más racional en beneficio de toda la nación. Quedaría en el tapete de las alternativas un desarrollo intermedio entre el capitalismo y el socialismo que conduciría eventualmente a este último, pero según un "modelo" netamente costarricense.

Podríamos llamarle una etapa de posible **social-capitalismo benefactor.** Según este modelo, en sus líneas generales, se mantendría, ampliaría y perfeccionaría el régimen político democrático de libre asociación y parlamentario, con respecto a los derechos humanos y a las garantías sociales, así como el clima actual favorable a la libre expresión y examen de las ideas, puntos sobre los cuales descansaría una sociedad socialista democrática y humanizante. Conforme se fueran fortaleciendo los centros nacionales de decisión se podría replantear el problema de la dependencia externa y el mercado nacional en forma directa y realista. En vez de desmantelar el sector de la economía estatal, con el apoyo de una mayoría política se le sometería a una transformación programada, eliminando algunas instituciones que evidentemente no han cumplido con sus cometidos, fortaleciendo otras desde el punto de vista financiero y técnico, mas no sin antes aumentar su eficiencia y su compromiso real con el bienestar público.

Esta política necesariamente implicaría que los sectores de funcionarios ligados a las instituciones públicas no podrían manejarlas a su antojo ni como simples parásitas del presupuesto nacional. Tampoco los grupos de presión incrementarían sus privilegios a costa de desvirtuar las finalidades de las instituciones en función de sus intereses particulares. Esta política necesariamente implicaría la eliminación de algunos organismos que no han cumplido con sus metas y que resultan

entrabantes para el logro de las soluciones reales a problemas del desarrollo nacional. Otras instituciones deberían más bien fortalecerse y quizás expandirse si han demostrado cabalmente eficiencia en el alcance de sus objetivos y si les quedan problemas reales que atacar dentro de su área de acción, ya que muchas veces no existen mecanismos de evaluación que permitan discernir si una institución debe ser eterna o temporal. Se dan casos de instituciones que tienen más de un cuarto de siglo de existir y no se sabe si han logrado solucionar algunos de los problemas que debían atender y siguen por tanto vegetando, como verdaderos parásitos del presupuesto nacional y de los bolsillos de los contribuyentes. Forman hoy día una legión de intocables, "vacas sagradas" del **Establishment** burocrático, que nadie sabe si tienen razón ya de existir o si la tuvieron en alguna época superada. Son el blanco favorito, con razón, de la reacción empresarial que se gesta detrás de un supuesto movimiento de "unidad".

Los consumidores, los contribuyentes o los sectores populares en general, deberían organizarse para respaldar las medidas que se requieren para comenzar el cambio de esas costosas e inútiles maquinarias. Creemos que el apoyo masivo de la población no se haría esperar una vez que se inicie una tarea de verdadera transformación institucional del sector público y se demuestre la racionalidad de la misma. Ningún régimen medianamente eficiente puede tolerar, sin poner en peligro su legitimidad, que muchos organismos públicos sigan estando al margen de los procesos de cambio que exige toda sociedad moderna y dinámica. Ya el Politólogo Charles Denton ha señalado que Costa Rica está en camino de volverse una "sociedad inmovilista", en razón del agotamiento a que han llegado muchos entes públicos y por la excesiva dependencia de ellos de gran parte de la fuerza de trabajo disponible que de otra manera sería más productiva. Hay que pensar en que, a nivel burocrático, ejerzan su efecto dinamizador los sistemas de competencia y de mercado, que bien utilizados garantizan eficiencia, una mayor objetividad en las decisiones y hasta la preservación de la democracia política.

En cuanto al régimen económico, el **social-capitalismo benefactor** no eliminaría la empresa privada de campos en los cuales constituye reconocidamente la mejor y más beneficiosa solución ante los peligros de una dictadura burocrática y centralizada. Pero el Estado como instrumento de fuerzas democráticas vigilaría que el presupuesto y los mecanismos del mercado nacional sirvan para mantener un nivel de pleno empleo de las fuerzas productivas del país; que la productividad de la mano de obra y los salarios aumenten; que los ingresos se repartan cada vez más equitativamente, pero evitando el paternalismo; que las necesidades fundamentales de la población queden satisfechas en cuanto a seguridad social,

educación, vivienda, recreación, vestido, etc. Dentro de un plan económico global todos esos objetivos son alcanzables sin autoritarismos, sobre la base de instrumentos como los impuestos escalonados sobre la renta y de sucesión, fuertes incentivos, préstamos, subvenciones, etc., de modo que sin imponer una difícil planificación centralizada que liquide el funcionamiento objetivo del mercado (el cual no es un invento capitalista), se pueda ir acomodando estructuralmente el sistema de costos, precios y ganancias de mercado a **finalidades sociales,** para cuyo señalamiento deberían necesariamente tomarse en cuenta las preferencias de los consumidores organizados y no sólo de las élites oficiales o empresariales. Como lo señalamos, se trata de una versión **intermedia** entre lo que existe y una forma democrática y avanzada de socialismo, dentro de la cual habría oportunidad para experimentar, e ir de ese modo conformando un régimen económico-social y político más humano, justo e independiente. Ese régimen necesariamente correspondería a las tradiciones, idiosincrasias y aspiraciones del pueblo costarricense, evitando la importación y aplicación mecánica de planes, proyectos o modelos adecuados a otras circunstancias históricas.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 34, Enero-Febrero, 1978, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**